

MUJERES ENTRE REJAS. DE LA EXCLUSIÓN A LA DISCRIMINACIÓN

MARÍA ELENA PEREA CÁRDENAS

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE – UNIVERSIDAD CARLOS III
FACULTAD DE HUMANIDADES
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA DEL DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2015**

MUJERES ENTRE REJAS. DE LA EXCLUSIÓN A LA DISCRIMINACIÓN

MARÍA ELENA PEREA CÁRDENAS

**Trabajo de grado de Maestría en Investigación para optar al título de
Magister en Filosofía del Derecho Contemporáneo**

**Directora
LUCÍA VILLAMIZAR HERRERA
Doctora en Filosofía**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE – UNIVERSIDAD CARLOS III
FACULTAD DE HUMANIDADES
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA DEL DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2015**

Nota de aceptación:

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Maestría en Filosofía del Derecho.

ELIZABETH GOMEZ ETAYO

Jurado

GUIDO GERMAN HURTADO VERA

Jurado

LUIS EDUARDO LOBATO PAZ

Jurado

Santiago de Cali, 06, noviembre, 2015

AGRADECIMIENTOS

A mi madre Elena por su ejemplo de dignidad y templanza.

A mis hermanos, en especial a Diego por su incondicional apoyo.

A mi compañero de vida, mi esposo Gerardo, por su amor, su orientación y aliento.

A mi hijo Álvaro José por hacerme disfrutar a plenitud los roles de mujer, madre, profesional y docente.

CONTENIDO

	pág.
RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	8
1. ANTECEDENTES	9
2. PRECISIONES CONCEPTUALES	14
2.1 Legislación	21
3. CONSIDERACIONES FINALES	34
BIBLIOGRAFÍA	36

LISTA DE ANEXOS

Anexo A. Entrevista interna Jamundí	(Ver CD, carpeta Anexo)
Anexo B. Entrevista dos internas afrodescendientes	(Ver CD, carpeta Anexo)
Anexo C. Entrevista trabajadora Inpec	(Ver CD, carpeta Anexo)

RESUMEN

El sistema penitenciario en Colombia ha sido estructurado para una población carcelaria de hombres, es decir, para el grupo mayoritario que lo constituye. Desde esa perspectiva; los requerimientos de las mujeres reclusas en las cárceles han sido invisibilizados por tanto, situaciones concretas que tienen que ver con la mujer y de su rol como hija, hermana, madre y esposa, son completamente abandonados durante su estadía en los centros penitenciarios.

Es necesario que en aras de garantizar los Derechos Humanos a la mujer reclusa, se generen políticas de género y acciones afirmativas que le otorguen eficacia a la igualdad, la equidad y la no discriminación.

Palabras claves: género, derechos humanos, cárcel, mujer, igualdad.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se presenta para optar al título de Maestría en Filosofía del Derecho del convenio entre la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y la Universidad Carlos III de España, y está vinculado al proyecto de investigación que lleva el título: “Programa de investigación sobre el estado de garantías en Derechos Humanos en los establecimientos penitenciarios y carcelarios del Valle del Cauca”, del grupo de investigación en Humanidades, Sociedad y Educación Superior Contemporánea de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual lo financia por medio de la Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico.

Teniendo en cuenta que desde la Maestría se han analizado los problemas fundamentales del Derecho Contemporáneo como fundamento de las diversas corrientes del pensamiento, y encontrando en los casos prácticos, posibles soluciones no sólo en ámbito de la legalidad, sino también en el terreno de la justicia, los sistemas penitenciarios y carcelarios tienen una larga historia en el mundo de occidente; han estado pensados para privar de la libertad, es decir, aislar, a todas aquellas personas que no cumplían las normas establecidas por una sociedad determinada, sin embargo, el aislamiento no ha contado con espacios dignos para que las personas que tuvieran que permanecer en ellos pudieran tener unas condiciones que les permitiera una estadía lo más apropiada para su condición de ser humano.

1. ANTECEDENTES

Al iniciar el presente documento, hay que recordar los inicios de lo que hoy se denomina **sistema penitenciario y carcelario**, con el ánimo de mostrar, al menos, en el Nuevo Reino de Granada, los detonantes para que una institución tan antigua en Europa, se trasladara a los territorios descubiertos por la Corona española. Cabe anotar que en la época posterior al descubrimiento es cuando efectivamente aparecen los primeros espacios de pérdida de libertad por “delitos” de todo tipo, desde el hurto, pasando por violación de derechos hacia los nativos, africanos y españoles, por asesinatos, genocidios, y en general, todo tipo de vejámenes cometidos en las nuevas tierras. De igual manera, es necesario puntualizar que los nuevos establecimientos de pérdida de libertad y la institucionalidad que se organizaba a su alrededor, tenían en sí mismo, una carga de violación de derechos muy fuertes que obligaban a España a emitir ordenanzas permanentemente.

El historiador y abogado José Wilson Márquez Estrada menciona en su artículo sobre el sistema penitenciario y carcelario¹, que en la época del imperio Español, en América no existía un sistema de castigo fundamentado en la pérdida de la libertad, ya que se aplicaban otros métodos de sanción a las personas que infringían la ley, como la muerte, los azotes, la vergüenza pública, el destierro y otras penas que afectaban el patrimonio económico; en este sentido, la monarquía imperante en la época tenía una serie de políticas para hacer pagar el daño que se producía a la sociedad, no con la idea de reparación a la víctima y resocialización al infractor. La corrección de las conductas era más que todo, un proceso de constricción moral, la pena producía un efecto interno sobre la conciencia del individuo infractor, de alguna manera tenía un resultado transformador.

Es así como “los primeros mandatos y leyes sobre cárceles datan de la época llamada el Nuevo Reino de Granada, en la legislación de las Indias, y en especial de las ordenanzas, de los años sucesivos a 1520, impuesta en la época de la Colonia”². Posteriormente, en el siglo XIX Colombia logra la independencia del régimen español, éste es el momento de inicio de la llamada época de la

¹ MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-1880. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p. 198-217

² INSTITUTO ROSARISTA DE ACCIÓN SOCIAL –SERES–, Universidad del Rosario. Desarrollo penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas del Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional. [en línea] Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011. p. 27 [consultado 07 de agosto de 2015] Disponible en Internet: http://www.urosario.edu.co/Accion-Social/documentos/Desarrollo_del_sistema_penitenciario.pdf

Republica, y “los ciudadanos solicitan a los legisladores del Congreso Republicano centrarse en las necesidades de la población carcelaria más que en la necesidad de construir y administrar centros penitenciarios”³.

Márquez Estrada⁴ relata que en el siglo XIX los legisladores consideran que para que la población interiorizara y respetara las normas, el castigo debía ser un instrumento de carácter intimidatorio y ejemplarizante a todas aquellas personas que la quebrantaran. Por esto, y otras razones más, los centros penitenciarios fueron instituciones que generaron desconfianza e inquietudes a la población en los albores del orden republicano por su fragilidad, evidenciando graves problemas en el nuevo modelo carcelario implementado. En la década del 30 del siglo XIX narra el autor, hubo un gran avance en la organización del sistema carcelario y penitenciario, con la expedición de un conjunto de normas tendientes a regularizar jurídicamente estas instituciones y se sentaron las bases para construir la red carcelaria de todo el país.

Durante los gobiernos de Rafael Márquez y Francisco de Paula Santander, la institución carcelaria urbana para castigar a los infractores de la ley, se organizó en el nuevo Código de 1837 que complementaba jurídicamente la política criminal del régimen republicano granadino; es así, como quedan fundidos en un solo organismo punitivo los dos sistemas, el penal y el penitenciario.

“El 15 de junio de 1857 se creó el Estado Soberano de Bolívar, una división administrativa y territorial de los Estados Unidos de Colombia denominada como 'Estado Federal de Bolívar' y reconocidos en las Constituciones de 1858 y 1863”⁵. El gran inconveniente para el Estado Soberano de Bolívar fue precisamente la inexistencia de cárceles seguras, cada provincia debía construir sus centros penitenciarios y las normas expedidas en este sentido resultaron ineficaces pues no existían recursos para tal fin, ni siquiera las capitales de provincia contaban con prisiones adecuadas y seguras.

En 1873 el gobernador de la provincia de Sincelejo relato estas condiciones:

Las cárceles no son en lo general lo que debieran ser. Son ranchos que no tienen los compartimientos necesarios porque no han sido construidos de una manera conveniente. Las providencias que por esta gobernación se han dado para obtener su mejora, no han correspondido al objeto deseado, porque la penuria del tesoro de los distritos no lo ha permitido. La cárcel del distrito capital que sirve de cárcel de la

³ Ibid., p.28.

⁴ MÁRQUEZ ESTRADA, Op. cit. p. 200.

⁵ Ibid., p.199.

provincia, no obstante las erogaciones que se han hecho para mejorarla, su estado no es satisfactorio, porque no ofrece las seguridades necesarias para mantener a los presos como deben estar, y esto hace que para evitar su fuga, se les obligue a soportar vejaciones y sufrimientos indebidos, manteniendo en prisión aflictiva a los que solo debieran estar arrestados. Para construir un edificio que corresponda a su objeto, se necesita una fuerte suma que el tesoro del distrito no puede dar y además, es al del Estado a quien esto corresponde”⁶

Por su lado, Camilo Benedetti, gobernador de la provincia de Barranquilla en 1868, expresó sobre las cárceles: “Ni la provincia, ni distrito alguno en ella, tiene edificio que pueda llevar el nombre de cárcel. En algunos de ellos, el tal edificio es un árbol de mamón, el encarcelado tiene que pagar el derecho de carcelaje, o al carcelero tanto por hora [...]”⁷

Además, en el distrito capital abundaba la delincuencia que se dedicaba a hurtar elementos del mercado, y “no existía ningún centro de reclusión que pudiera llamarse dignamente cárcel, la ruina amenazaba lo que servía de casa de castigo”⁸. Al parecer, esto no era asunto del gobernante de turno. Era normal que por las condiciones físicas de los lugares que servían de centros de reclusión permanentemente se fugaran los presos.

En congruencia, en 1876, el gobernador de la providencia de Magangué expresó lo siguiente de las cárceles: “Asco y más asco, náuseas producen estas zahúrdas impropriadamente denominadas cárceles”⁹.

Después de una breve descripción de las cárceles de la época a través de los gobernadores, según Márquez Estrada¹⁰, en 1879 el Procurador General del

⁶ B.B.C. Gaceta de Bolívar, Cartagena, agosto 15 de 1873, p. 3. Citado por MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-188. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p. 40.

⁷ SOLANO D., Sergio Paolo. Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla, dando varios datos para el mensaje a la Asamblea Legislativa. 1868. [en línea] En: Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Octubre, 2013, no. 21. [Consultado 17 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/5713/5072>.

⁸ B.B.C. Gaceta de Bolívar, agosto 27 de 1868, p. 2. Citado por MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-188. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p. 44.

⁹ B.B.C. Gaceta de Bolívar, agosto 7 de 1870, p. 5. Citado por MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-1880. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p., p. 43.

¹⁰ MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-1880. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p. 206.

Estado soberano de Bolívar, después de quince años de estar conviviendo con el problema sobre esta temática, habló sobre la población carcelaria, la cual se encontraba representada en la “escandalosa suma de 850 presos en todo el estado [...]”¹¹, dejando en evidencia que la situación carcelaria del Estado había empeorado y que la política carcelaria y penitenciaria del Estado soberano de Bolívar había sido un rotundo fracaso. La ley del 2 de diciembre de 1869 nace de la necesidad de reglamentar la vida carcelaria, atenuar los efectos negativos y otorgo facultades los gobernadores para reglamentar las cárceles provinciales en el estado de Bolívar.

Por otro lado, durante el gobierno de Rafael Núñez (1880-1894) se realiza un acuerdo con la comunidad religiosa del Buen Pastor* para la reclusión y custodia de las mujeres, creando la primera cárcel denominada asilo San José; sin embargo, solo estuvo en funcionamiento por cinco años. “En 1895 en la ciudad Medellín se establece la primera cárcel para mujeres en Antioquia, mediante ordenanza 5 del 29 de mayo signándole la dirección a las religiosas del Buen Pastor”¹².

Siguiendo este recorrido histórico, a finales del siglo XIX se construyó en Bogotá el panóptico y recibió el nombre de la Ciudad del Penado, siendo una de las principales cárceles de la época en Colombia, además, se construyó una capilla central y las torres de vigilancia y garitas fueron reemplazadas por cadenas, grilletes y cerrojos. Una de las características principales de este centro penitenciario, fue la participación en su construcción de los mismos reclusos; este centro fue planeado para un número definido de internos pero rápidamente se produjo un hacinamiento desbordado.

El panóptico fue el edificio más notable de la republica de los Estados Unidos de Colombia, que más tarde fue utilizado como lugar de represión en la Guerra de los Mil Días, aquí se dio cabida a los opositores políticos del régimen conservador y los soldados detenidos como prisioneros de guerra. [...] 5192 presos políticos estuvieron hacinados en 204 celdas durante la Guerra de los Mil Días, allí fueron sometidos a todo tipo de vejámenes y torturas, estrechez, aislamiento, oscuridad; de

¹¹ Ibíd., p.216.

*Este es el nombre que comúnmente se le conoce, aunque en la nomenclatura del Inpec, actualmente se le llama Reclusión de mujeres y se le suma el nombre de la ciudad donde se encuentre ubicada, ejemplo, Reclusión de Mujeres de Bucaramanga

¹² INSTITUTO ROSARISTA DE ACCIÓN SOCIAL –SERES–, Universidad del Rosario. Desarrollo penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas del Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional. [en línea] Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011. p. 29 [consultado 07 de agosto de 2015] Disponible en Internet: http://www.urosario.edu.co/Accion-Social/documentos/Desarrollo_del_sistema_penitenciario.pdf

esta manera, el Panóptico de Bogotá pasó a la historia como la cárcel de presos políticos más cruel y despiadada por lo cual era denominada “el matadero oficial”¹³.

Ahora bien, al primera expresión legal y formal que buscó organizar el sistema penitenciario en Colombia fue la Ley 35 de 1914 y el Decreto orgánico N° 1557 del mismo año, el cual crea la Dirección General de Prisiones y se reglamentó como entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. Luego, el Decreto Ley 1405 de 1934 creó el primer Estatuto de Régimen Penitenciario y Carcelario, para reglamentar su administración y organización.

Durante 1936 a 1938 se emitió el nuevo código penitenciario colombiano y la ley de vagos; con el desarrollo del capitalismo se construyen las cárceles de Palmira, la Picota y Popayán y la reestructuración de la Dirección General de establecimientos de detención de penas y medidas de seguridad. Seguidamente, en 1958 se emite la Ley de maleantes; en 1960 se da la reestructuración de la División de penas y medidas de seguridad y mediante el Decreto 2160 de 1992 se fusiona la Dirección general de prisiones de Ministerio de justicia con el Fondo rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el Instituto Nacional penitenciario y carcelario INPEC. Lo anterior, según su misma la reseña histórica¹⁴.

Finalmente, desde comienzos de la República en Colombia, la situación carcelaria y penitenciaria ha sido crítica, sobre todo en materia financiera o de recursos económicos, impidiendo que la adecuada infraestructura y locaciones carcelarias, garanticen la dignidad de las personas privadas de la libertad, aunado a estas circunstancias. De igual forma, ha sido una constante durante la historia el aumento de la población carcelaria, lo cual ha contribuido al hacinamiento; hasta la fecha, ha llegado a índices insostenibles y el Estado aún no ha creado políticas que finalmente solucionen las condiciones de la infraestructura penitenciaria.

¹³ MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. Estado Punitivo y control criminal. Cárceles, prisiones y penitenciarias en Colombia en el siglo XIX. En: Revista criminalidad. Enero-abril, 2013, vol. 55, no. 1, ,p. 109

¹⁴ MINISTERIO DE JUSTICIA. Reseña histórica [en línea]. Bogotá D.C.: INPEC. [consultado 07 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica>

2. PRECISIONES CONCEPTUALES

Con el auge internacional de los Derechos Humanos se han introducido diferentes conceptos que ayudan a profundizar y precisar todos los estudios e investigaciones que surjan sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres, como el de no discriminación por sexo. Por ello, se considera que la incorporación de nuevos y diversos términos y su aplicación en múltiples campos pueden ser beneficiosos para el desarrollo social, así, como para la correcta adecuación de la legislación existente, dirigida a la cultura igualitaria, entre estos están: género, machismo, participación equilibrada entre hombres y mujeres, perspectiva de género, sexismo, entre otros.

En primer lugar, la expresión «derechos humanos» es relativamente moderna, pero, el principio al que se refiere es tan antiguo como la humanidad y aun cuando es un término polifónico y filosóficamente impreciso, que se debate entre las vertientes éticas y jurídicas, algunos autores proponen sinónimos que sirven para usarlo como el mejor discurso técnico sin pretender modificar el lenguaje natural. Como lo señala la doctora en Derecho, Maria del Carmen Barranco, con el término Derechos Humanos parece hacerse referencia a algo que tiene que ver con la moral y con el derecho:

Para algunos autores son moral o derecho (M Atienza); para otros son moral que debe ser atendida por el Derecho positivo (E Fernández o A E Pérez Luño); hay quienes lo sitúan en el plano de lo moral cerrando las puertas a la posibilidad de su juridificación (F Laporta o A Ruiz Miguel); para otros son derecho natural (A Fernández – Galiano o J. Hervada) y según otros autores no puede hablarse de ellos desde derecho positivo (G Peces Barba y con matices, L Prieto)¹⁵

Estos últimos, prefieren un término en función del alcance ético y jurídico.

En este orden de ideas, ciertos derechos y libertades son fundamentales para la existencia humana. Son derechos intrínsecos de toda persona, por el mero hecho de pertenecer al género humano y están fundados en el respeto a la dignidad y el valor de toda persona. “No se trata de privilegios o dar prebendas concedidas por gracia de un dirigente o un gobierno. Tampoco pueden ser suspendidos por un

¹⁵ BARRANCO AVILÉS, Maria del Carmen. El Discurso de los derechos: del problema terminológico al debate conceptual. Madrid: Editorial Dykinson, 1996. p. 02.

poder arbitrario. No pueden ser denegados ni retirados por el hecho de que una persona haya cometido un delito o infringido una ley”¹⁶.

En principio, estos derechos carecían de base jurídica y se consideraba que no eran más que exigencias morales. Con el tiempo fueron formalmente reconocidos y protegidos por la Ley. “En muchos casos quedaron consagrados en las constituciones de los países, con frecuencia en forma de Carta de Derechos que ningún gobierno podía suspender o negar. Además, se establecieron tribunales independientes a los que podían recurrir en busca de reparación a las personas a las que se hubiera denegado sus derechos.

De esta forma, los abusos generalizados de los derechos humanos y libertades fundamentales durante el decenio de 1930, que culminaron en las atrocidades de la guerra mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, pusieron fin a la idea de que cada Estado, por su cuenta, tenía la última palabra en el trato que se daba a sus ciudadanos. La firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945 situó los derechos humanos en la esfera del derecho internacional. Los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron adoptar medidas para proteger los derechos humanos. Tres años más tarde, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos proporcionó al mundo «un ideal común para todos los pueblos y naciones», basado en el «reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana» (Preámbulo).

Las cuestiones y las obligaciones en materia de derechos humanos forman hoy en día una parte importante del proceder cotidiano de los gobiernos. A lo largo de los años, desde la proclamación de la Declaración Universal en 1948, los Estados han elaborado un número considerable de instrumentos de derechos, en los ámbitos regional, nacional, e internacional, y han contraído obligaciones en virtud de leyes internacionales y nacionales para promover y proteger una amplia variedad¹⁷.

Después del proceso de conceptualización y apropiación del verdadero sentido de los derechos humanos en los diferentes países, y más importante, en la conciencia y quehacer diario de los ciudadanos, la mujer y en general, el género, también hacen su aparición, aunque varios años después; es así como en 1995 en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Bejín, se adoptó el concepto de género, declarando que “se refiere a los papeles sociales construidos para la mujer y el hombre asentado en base en su sexo y dependen de un

¹⁶ NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Los Derechos Humanos y las prisiones: Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. Nueva York y Ginebra. 2004. p. 4.

¹⁷ *Ibíd.*, p.4.

particular contexto, socioeconómico, político y cultural y afectados por otros factores como son la edad, la clase la raza y la etnia”¹⁸

El género, se convierte entonces, es una categoría que permite cuestionar los valores y las creencias en las relaciones entre los sexos, permite comprender las relaciones de subordinación y dominación existente entre hombres y mujeres, la desigual distribución de poder que influye entre ellos y puede desarrollar sus capacidades personales, profesionales y sociales. Así mismo, “género es la construcción diferencial de los seres humanos en tipos femeninos y masculinos. El género es una categoría relacional que busca explicar una construcción de un tipo de diferencia entre los seres humanos”¹⁹.

Según Benhabib²⁰, las teorías feministas, sean psicoanalíticas, postmodernas, liberales o críticas, coinciden en el supuesto de que la constitución de diferencias de género es un proceso histórico y social, y en que el género no es un hecho natural, nombra a la vez: es niña, o es niño. La palabra, el lenguaje, es la marca que significa el sexo e inaugura el género durante el resto de la vida, día a día, el ritual se repite casi imperceptiblemente.

Cada persona reconoce a las demás a través de la mirada de sus cuerpos y de la escucha de sus voces, para constatar si son mujeres u hombres. Además, certifica su percepción inicial en las acciones, los comportamientos, las maneras de actuar y de relacionarse de cada quien, y por el conjunto de lo que cada persona puede y debe hacer, decir, pensar, sentir, desear y también por lo que no debe ni puede hacer, pensar, decir, desear. Es decir, “cada quien reconoce a los o las demás, sépalo o no, reconociendo los límites impuestos a su ser en el mundo por esa construcción que es el género”²¹.

Ahora bien; teniendo en cuenta que uno de los mayores retos del Constitucionalismo contemporáneo es intentar plasmar en la realidad el valor de la igualdad y con ello pretende abolir la discriminación, es necesario verificar los principios de igualdad en la Ley, la que se refiere básicamente, a la obligación de la autoridad legislativa; de tratar idénticamente situaciones análogas y sólo no hacerlo cuando no se identifiquen, “tratar igual al igual y desigual a los desiguales,

¹⁸ LÓPEZ REYES, Sandra; GÓMEZ HINOJOSA, Carolina y MUNDO VELÁSQUEZ, Rodolfo. Enfoque de género en microempresas rurales un modelo de gestión. En: Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa. Julio-diciembre, 2015, no. 3, p. 7.

¹⁹ BENAHAIB, Seyla, Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral. En: Isegoría: Revista de filosofía moral y política. 1992, vol. 6, p. 52.

²⁰ *Ibíd.*, p. 37-64.

²¹ MILLET, Kate. Política sexual: Cátedra. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995. p. 68.

igualdad de aplicación ante la ley e igualdad del contenido de la ley y de esta manera proponer una igualdad sustancial y material”²².

El derecho a la no discriminación exige, fundamentalmente que todos los miembros de la sociedad, sin distinción de ningún tipo tengan las mismas oportunidades para gozar de iguales derechos. Del mismo modo, es importante definir la igualdad con respecto al género, o igualdad entre hombres y mujeres, la cual expresa el concepto de que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades personales y elegir sus opciones sin limitaciones impuestas por estereotipos, y conceptos rígidos de los roles de género y prejuicios.

En congruencia, la igualdad de género significa que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres reciben la misma consideración, se les reconoce el mismo valor y son apoyados por igual. Sin embargo, no quiere decir que las mujeres y los hombres vayan a identificarse, si no que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no deben depender de que hayan nacido hombres o mujeres. Es decir, la igualdad determina razonablemente cuál es el grado de desigualdad de trato que puede llegar a existir entre dos personas, por lo que la igualdad mide el grado de desigualdad.

De esta manera, la igualdad es un concepto relacional que muestra la identidad que existe entre dos o más personas, cosas o hechos en relación tan sólo con algunos aspectos o elementos, reconociendo las diferencias sustanciales que existen en resto de los aspectos. “La igualdad no es una realidad objetiva o empírica anterior al derecho, sino que la construcción jurídica de la igualdad implica siempre un juicio de valor, un proceso de abstracción que depende de la elección de las propiedades, criterios o rasgos considerados como relevantes entre los que se compara”²³.

En la academia, los movimientos feministas, organizaciones ciudadanas y hasta en los organismos internacionales han desarrollado una visión crítica, analítica de lo que acontece en el orden de los géneros; a esta visión analítica encauzada hacia la acción institucional y civil se conoce como perspectiva o enfoque de género. Ya se acepta que quien se ubica en esta perspectiva hace referencia a la concepción que

²² PERÉZ PORTILLA, Karla. Principio de igualdad: alcances y perspectivas. México: UNAM-Conapred, 2005. p. 91.

²³ RUIZ CARBONELL, Ricardo. El principio de igualdad entre hombre y mujeres. Del ámbito público al ámbito jurídico-familiar. Trabajo de grado Doctor en Derecho. Santiago de Cali: Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado, 2009.p. 11.

sintetiza las teorías y concepciones filosóficas liberadoras desarrolladas a partir de las contribuciones feministas a la cultura y a la política²⁴

Como lo expresa Marta Lamas²⁵, la perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual. Y es importante reconocer que todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual. De esta forma, esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia sustantiva que marcará el destino de las personas. Lo lógico, expresa Lamas, es que si las funciones biológicas son tan dispares, las demás características –morales, psíquicas– también lo habrán de ser. Desde hace varios años, antropólogos, biólogos, psicólogos, etc., se han dedicado a investigar y esclarecer qué es lo innato y qué lo adquirido en las características masculinas y femeninas de las personas. Se ha comprobado que el status femenino es variable de cultura en cultura, pero siempre con una constante: la subordinación política de las mujeres, a los hombres. Hasta hace poco tiempo esto se explicaba en términos "naturales" y hasta "inevitables", contraponiendo otra constante: la diferencia biológica entre los sexos.

Por lo anterior, la perspectiva de género permite enfocar, analizar y comprender las características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus semejanzas y sus diferencias. Desde esa perspectiva se analizan las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros; también los conflictos institucionales y cotidianos que deben encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen. Contabilizar los recursos y la capacidad de acción de mujeres y hombres para enfrentar las dificultades de la vida y realizar sus propósitos, es uno de los objetivos de ubicarse en la perspectiva de género, y uno de sus resultados más prometedores.

Para completar las precisiones conceptuales, es necesario clarificar el concepto de Acciones afirmativas y en este sentido se indica que “el término fue empleado por primera vez en la Civil Rights Act de 1964”²⁶. Sin embargo, nacen al “constitucionalismo moderno en la Constitución de la República de la India en 1949 que en su artículo 16–4° contiene el mandato de reservar puestos en la

²⁴ BENHABID, Seyla y CORNET, Drucilla. Teoría feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons el Magnànim, 1990. p. 23.

²⁵ LAMAS, Marta. La perspectiva de género [en línea]. En: Revista de Educación y Cultura: de la Sección 47 del SNTE. Diciembre, 1995, no. 8, p. 14-20 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm>

²⁶ RUIZ CARBONELL, Ricardo. El principio de igualdad entre hombre y mujeres. Del ámbito público al ámbito jurídico-familiar. Trabajo de grado Doctor en Derecho. Santiago de Cali: Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado, 2009.p. 26.

administración del Estado a los miembros de la casta de los *dalits* o los intocables (secularmente marginada), con el objeto de compensar, a través del marco jurídico, la discriminación que la misma sufría en la sociedad, para así, lograr una situación más justa”²⁷.

Marta Suplucy, exalcaldesa de São Paulo, Brasil indica que “las acciones afirmativas son estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por medio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Ellas tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla”²⁸.

Las acciones afirmativas se pueden desarrollar en muy diversos campos de la competencia estatal, las instituciones y las organizaciones públicas: laboral, sindical, educativo, político, etc. Como también es amplia la gama de discriminaciones que se buscan corregir en un momento dado: raciales, étnicas, de género, grupos de edad; es decir, tantas como se hayan desarrollado los movimientos y grupos que las padecen y que reivindican la condición humana —el derecho a ser igualmente libres y dignos— de sus integrantes. En última instancia, son estrategias destinadas a ampliar y profundizar la democracia realmente existente.²⁹

Sin embargo, en la doctrina y de la misma forma, en la normativa y jurisprudencia europeas no existe una clarificación en este punto. No hay una delimitación precisa de lo que son las acciones afirmativas, ni siquiera de sus tipos. En este sentido, se podría decir, que “aunque no existe una definición normativa ni un acuerdo sobre lo que son las medidas o políticas de acción afirmativa o positiva, se podría entender que estas medidas suponen la creación de mecanismos o la utilización de políticas de carácter diferenciado para favorecer a personas o colectivos que están o han estado discriminados, o que se encuentran en una situación de desventaja”³⁰.

²⁷ GIMÉNEZ GLUCK, David. Una manifestación polémica de igualdad: acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa. Valencia: Tirant lo Blanc, 1990. p. 15-16.

²⁸ SUPLECY, Marta. Novos paradigmas nas esferas de poder. En: Estudios feministas. 1996, vol. 4, no. 1, p. 131. Citada por BARBIERI GARCÍA, María. Teresita de. Acciones afirmativas: Antecedentes, definición y significados. Aportes para la participación de las mujeres en los espacios de poder. En: Memorias del Foro Mujeres y Política, Instituto Nacional de las Mujeres. 2002, p. 28-34.

²⁹ BARBIERI GARCÍA, María. Teresita de. Acciones afirmativas: Antecedentes, definición y significados. Aportes para la participación de las mujeres en los espacios de poder. En: Memorias del Foro Mujeres y Política, Instituto Nacional de las Mujeres. 2002, p. 1.

³⁰ GARCÍA AÑÓN, José. El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa. Algunos problemas de la dogmática jurídica y el Derecho Europeo [en línea] En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. 1999, no. 2 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.uv.es/cefd/2/garcia.html>

Resumiendo lo anterior, se puede afirmar que las medidas de acción afirmativa son un tipo de normas características del Estado Social de Derecho cuya función es promocional, esto es, utiliza medidas de estímulo, incentivación o alentar, para favorecer la realización de acciones o fines considerados como ventajosos.

Al respecto la Corte Constitucional se ha referido sobre las acciones afirmativas de la siguiente forma:

El carácter de acciones afirmativas, denominación que, como es sabido, alude a todas aquellas medidas, políticas o decisiones públicas a través de las cuales se establece un trato ventajoso, y en cuanto tal formalmente desigual, que favorece a determinadas personas o grupos humanos tradicionalmente marginados o discriminados, con el único propósito de avanzar hacia la igualdad sustancial de todo el conglomerado social. Conviene entonces referirse brevemente a este aspecto, ya que el mismo tiene incidencia en las características del análisis de constitucionalidad que en este caso ocupa a la Corte. La acción afirmativa es un concepto acuñado por el sistema jurídico de los Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo pasado con el propósito de promover medidas encaminadas a superar la discriminación y los prejuicios que, más de cien años después de la abolición de la esclavitud, existían aún en contra de la población negra, y comprende medidas de carácter legislativo, ejecutivo, e incluso decisiones judiciales. Poco tiempo después este concepto fue acogido en Europa, en donde tuvo gran desarrollo, especialmente frente a la situación de las mujeres, y su entonces incipiente incursión en varios espacios hasta poco antes reservados a los hombres, entre ellos el ámbito profesional y laboral y el de la participación política³¹.

Finalmente, para referirse a problemas de género y en especial, como se ha presentado en el presente trabajo, para dirigido a la población femenina y reclusa y desde esta perspectiva, se hace necesario realizarlo en términos de derechos e igualdad y como bien lo señala Ollero Tassara, sin duda, “el *derecho* nos remite a la igualdad, si queremos ahondar en su contenido. Si se tratase de una igualdad aritmética fácilmente formalizable, las posibilidades del intento serían prometedoras pero no parece ser el caso”³². Es así como el debate se inserta en un entramado, en una serie de nociones diferentes, contradictorias e incompatibles del derecho. Las cuestiones de género se plantean en términos de derecho pues este constituye el último peldaño, el referente final para resolver determinados desacuerdos problemas y desacuerdos humanos que no

³¹ COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-293/10 (21 Abril 2010). Por el cual se definen las Acciones afirmativas-concepto, Acciones afirmativas-evolución histórica, Acciones afirmativas-Tipos [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado 07 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-293-10.htm>

³² OLLERTO TASSARA, Andrés. Derechos humanos y metodología jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989. p275

encuentran solución por otros mecanismos, de esta manera, se acentúa la importancia de lo jurídico y el debate acerca de los derechos por encima de otras consideraciones como serían las amistosas, morales, políticas, diplomáticas etc. El derecho proporciona una legitimidad y no sólo una solución fáctica. El derecho se impone en última instancia aun cuando sea por la fuerza aunque no resuelve los problemas humanos que si resultarían resolubles con buena voluntad, amistad u otras consideraciones.

Por último, en Colombia, si bien existen normas anteriores a 1991 que podrían ser entendidas como acciones afirmativas, este concepto gana especial notoriedad sobre todo a partir de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política, cuyo artículo 13 resalta el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de los grupos discriminados o marginados. El texto superior contiene además otras disposiciones que de manera específica plantean el mismo mandato frente a colectividades específicas, entre ellas los artículos 43 a favor de las mujeres, 47 a favor de las personas discapacitadas y 171 y 176 sobre circunscripciones especiales para determinados grupos étnicos para la elección del Senado y la Cámara de Representantes.

2.1 LEGISLACIÓN

Antes de examinar los diferentes sistemas de normas internacionales es necesario precisar la obligatoriedad jurídica de toda esta legislación, en este sentido, las normas internacionales tienen diversos efectos jurídicos según su fuente, de tal manera que los distintos niveles de obligación jurídica de los Estados depende de si las normas internacionales emanan de los tratados internacionales o de diversos conjunto de principios, reglas mínimas y declaraciones.

Varios órganos pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas han promulgado normas y reglas internacionales relacionadas con los derechos humanos en la administración de justicia. Los principales han sido la Comisión de Derechos Humanos, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y los Congresos de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebran con carácter periódico, todas esas normas han sido adoptadas en última instancia por la Asamblea General o el Consejo Económico y Social, dos de los principales órganos de las Naciones Unidas.

Por ende, en materia derechos humanos, el respeto por la igualdad y la equidad de género son objeto legítimo del derecho internacional y del escrutinio de la

comunidad internacional³³, las normas internacionales de derechos humanos obligan a todos los Estados, partes y a sus agentes. El sistema interamericano de protección cuenta con instrumentos vinculantes para Colombia que recogen obligaciones positivas y negativas respecto de las personas detenidas, a saber: la Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, la Convención americana sobre derechos humanos, la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura y el Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

Además, en las Naciones Unidas se encuentra la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo y la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la convención sobre los derechos del niño.

Respecto de la mujer específicamente, la OEA aprobó la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará”³⁴. Colombia es Estado Parte en todos los instrumentos del sistema interamericano de protección y reconoció, a partir del 21 de junio de 1985, la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En consecuencia, “la interpretación y aplicación armónica e integral de las normas internacionales vinculantes para Colombia, la utilización de aquellas que tienen valor como un referente doctrinario en el análisis de la situación y, naturalmente, las disposiciones constitucionales y legales internas, conforman el marco normativo a partir del cual se definen las obligaciones del Estado en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres privadas de libertad”.³⁵

³³ Carta de las Naciones Unidas [en línea]: Preámbulo. (Artículos 1 y 55 c) [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.un.org/es/documents/charter/>

³⁴ Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Para” [en línea] Belem do Para. Organización de los Estados Americanos, OEA, 1994 [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

³⁵ PROCURADURÍA DELEGADA EN LO PREVENTIVO PARA DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS, GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. Mujeres y prisión en Colombia análisis desde una perspectiva de derechos humanos y género [en línea]. Bogotá D.C.: Unifem, 2006. p. 12 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf>

De conformidad con lo anterior, puede observarse que las normas internacionales contienen disposiciones que protegen a la mujer de manera integral y que las mismas, han venido evolucionando para responder a los fenómenos que afectan la vigencia y la eficacia de los derechos en aspectos particulares como la superación de las prácticas discriminatorias y de hechos de violencia contra la mujer aplicables a las personas privadas de la libertad. “Las obligaciones del Estado Colombiano en esta materia se derivan de la proclamación, suscripción o ratificación según el caso de tales instrumentos”³⁶.

Ahora bien, en lo que se refiere a la normatividad nacional, la Constitución Política de Colombia –en particular, su artículo 43-, a nivel legislativo se encuentran Ley 888 de 2004, por la cual se modifica el Decreto 200 de 2003 en lo relacionado con el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, la Ley 65/93, Código Penitenciario y Carcelario reformada por la Ley 1709 DE 2014, Código Penal y la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la protección de la mujer en general, y de la mujer privada de libertad en particular, se registran la Ley 1009 de 2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género que “tiene por objeto identificar y seleccionar un sistema de indicadores de género, categorías de análisis y mecanismos de seguimiento para hacer reflexiones críticas sobre las políticas, los planes, los programas, las normas, la jurisprudencia para el mejoramiento de la situación de las mujeres y de la equidad de género en Colombia”³⁷, la Ley 82/93, por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia, y la Ley 750/02, por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario.

Además, el “acuerdo 011 de 1995 del Consejo Directivo del Inpec, expedido en desarrollo del Código Penitenciario y Carcelario, orienta la elaboración de los reglamentos de régimen interno en todos los establecimientos de reclusión del país, incluidas, por supuesto, las reclusiones de mujeres, es decir, no contiene referencias especiales para la condición de mujer”³⁸. Desconociendo, de esta

³⁶ Ibíd., Disponible en Internet: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf>

³⁷ COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1009 de 2006. (enero 23). Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género. En: Diario oficial, Bogotá. 23, enero, 2006. No. 46.160. p. 1.

³⁸ PROCURADURÍA DELEGADA EN LO PREVENTIVO PARA DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS, GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. Op. cit., p.14.

manera, las disposiciones internacionales y el código penitenciario y carcelario, que sí contiene normatividad de género sobre trabajo, educación, entre otros.

Asimismo, la resolución 7302 de 2005 del Inpec mediante la cual se expiden pautas para la atención integral y el Tratamiento Penitenciario, y por último para la zona pacífica se encuentra la Resolución No. 391 del 01 de marzo de 2011 del Inpec, mediante la cual se crea el Reglamento Interno de la Cárcel de Jamundí, que es también una normatividad de carácter general para hombres y mujeres, invisibilizando una vez más la condición femenina.

Como se ha podido apreciar en materia de la perspectiva de género para la mujer privada de la libertad, en Colombia se encuentra un amplio catálogo normativo de carácter internacional, que como se ha afirmado anteriormente, es de carácter vinculante; también es extensa la normatividad interna que desarrolla y complementa el marco normativo internacional. Sin perjuicio de lo anterior, existen algunos vacíos legislativos que suponen un esfuerzo en la interpretación y aplicación de las normas tanto de las autoridades encargadas de la implementación desde el poder ejecutivo como de su aplicación por parte del operador judicial.

Más allá de los problemas de falta de legislación especial para la mujer privada de libertad y sobre la aplicación e interpretación normativa que afronta la rama judicial, el conflicto más grave que atraviesa esta población en Colombia es la eficacia de la norma, pues un gran porcentaje del amplio catálogo normativo pasa a ser “letra muerta” si el Estado no garantiza su cumplimiento. “La eficacia se refiere a que la norma es realmente obedecida y seguida; como dice Kelsen, al hecho real de que ella es efectivamente aplicada y seguida, de una conducta humana conforme se verifican los hechos. Es lo que técnicamente se llama la efectividad de la norma. Eficacia es la capacidad de alcanzar los objetivos previamente fijados como metas”³⁹ y designa la cualidad de producir en mayor o menor grado efectos jurídicos, al regular desde luego, las situaciones y comportamientos que conoce.

De esta manera, en Colombia no puede considerarse que hay un avance en la protección al derecho a la igualdad, que está en cabeza de la mujer privada de libertad cuando se evidencian los resultados de algunos documentos, como el proferido en 2006 por la Procuraduría general de la nación⁴⁰ en el que se hace un

³⁹ DA SILVA, José Alfonso. Aplicabilidad de las normas constitucionales [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. p. 51 [consultado 16 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1000/5.pdf>

⁴⁰ Ver texto completo: PROCURADURÍA DELEGADA EN LO PREVENTIVO PARA DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS, GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. Mujeres y prisión en Colombia análisis desde una perspectiva de derechos

diagnóstico de la situación de las mujeres en prisión y el documento que contiene el informe sobre violación de los derechos humanos de las personas detenidas en Colombia. Sumando a lo anterior, 2010 fue el año en el cual se registra la falta de aplicación del contenido de las normas internacionales y del Código Penitenciario y carcelario que hace referencia específicamente a las mujeres en temas como las características de las reclusiones de mujeres, la creación de guarderías para los menores de tres años que permanezcan con sus madres en prisión o el desarrollo de las normas específicas sobre educación, salud y trabajo.

Señala el documento⁴¹ de la Procuraduría general de la Nación que hay ciertos aspectos de la vida penitenciaria que pueden resultar inadvertidos y tienen un efecto de invisibilización de la mujer, como el de la categorización de los establecimientos de reclusión, o los reportes estadísticos que genera el Inpec, en los cuales, se omite la asignación de los penales y existencia de centros de reclusión femeninos; tampoco, se señala la capacidad existente para los mismos, ocultando el grado de hacinamiento femenino y para conocer en dónde hay mujeres detenidas, se debe revisarse todo el listado para ubicar en las cifras sobre población por sexos.

En el informe llama la atención que los pabellones destinados a las mujeres en los establecimientos de reclusión masculinos sean conocidos como “anexos” sugiriendo o significando que son, una extensión, un apéndice o un agregado que las mujeres representarían frente al sistema con las repercusiones que ello tiene en la atención de sus necesidades.

Concluye el informe sobre la violación de los derechos humanos en cárceles en Colombia de la Universidad de los Andes, que en Colombia la realidad no se ajusta a las obligaciones del pacto, en primer lugar, por la separación entre hombres y mujeres: se mostró que no existe evidencia clara de que en la práctica los penales mixtos tengan la separación material que exige el comité, y que el porcentaje de hacinamiento en los penales femeninos triplica el porcentaje de todo el sistema evidenciando una situación alarmante que agrava las condiciones de la población femenina. Asimismo, indica el informe que en relación con los tratamientos médicos y sanitarios a los que tienen acceso, existe una serie de carencias y deficiencias inaceptables a la luz del pacto.

humanos y género [en línea]. Bogotá D.C.: Unifem, 2006. p. 12 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf>

⁴¹ Ibid., Disponible en Internet: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf>

Por lo cual, tratándose de perspectiva de género de los derechos humanos, en las instituciones de reclusión penitenciaria se hace indispensable abordar lo concerniente al derecho fundamental a la salud de la mujer embarazada reclusa en Colombia.

Si bien se encuentra descrito y esbozado, no es efectivamente protegido, como quiera que la vulnerabilidad de la mujer embarazada sea preciso analizarla respecto de las demás mujeres, de cara a la realidad social que vive. Diferencia y desigualdad respecto de esas mujeres en condiciones biológicas, psíquicas, sociales y ambientales diferentes, por lo cual puede tener distintas condiciones de nutrición, estatus socioeconómico y mental, con un entorno familiar protector, en el caso de una mujer que tenga cónyuge o compañero estable, una familia acomodada, que le aporte a ella y a la criatura no nacida en su vientre, un entorno de bienestar, mientras que, en la mayoría de los casos, las mujeres reclusas, son quienes proveen el sostenimiento económico familiar que, aunque todas estén embarazadas, unas están en prisión y las otras no, por lo que ese grupo es doblemente vulnerable como mujer embarazada y ahora en prisión.⁴²

La mujer al ser reclusa en un establecimiento penitenciario, se ve obligada a abandonar a sus hijos y a permanecer prisionera durante el periodo de gestación lo que le impone un sufrimiento mayor, es allí donde asume una doble condición de indefensión y vulnerabilidad, paradójicamente frente a las mujeres en condiciones de libertad, pueden elegir, sin restricción, a qué régimen afiliarse.

Corroborando lo anterior, las Sentencias de Tutela 801 de 1998, 179 de 1998, 231 de 2001, exhiben la ineficacia de las leyes, que no son suficientes para garantizar la igualdad de las mujeres embarazadas (sin discriminación alguna) para acceder al derecho fundamental a la salud, porque no garantizan ni el respeto ni la continuidad del derecho fundamental a la salud de la mujer, y mucho menos cuando esa mujer reclusa está embarazada.

Es así como la inoperancia de la Ley se presenta por los entes involucrados en el “sistema de salud”, y se constituyen en la primera barrera de acceso al éste derecho fundamental de la mujer embarazada reclusa, porque quien la aplica en las situaciones particulares de prestación del servicio es otro ser humano, que no puede ser totalmente objetivo, aunque lo quisiera, porque está influenciado por el medio, las circunstancias, las presiones administrativas, para mencionar solo algunas razones. Esas decisiones pueden amenazar e, incluso, vulnerar el acceso al derecho fundamental a la salud.

⁴² YAGÜE OLMOS, Concepción. Mujeres en prisión: Intervención basada en sus características, necesidades y demandas. En: Revista Española de Investigación Criminológica. España. 2007, vol. 24, no. 5, p. 17-18.

En los términos resaltados por la Corte, una mujer embarazada requiere de un ambiente sano, alimentación adecuada y un entorno protector, para que la criatura que está en su vientre pueda formarse hasta que se produzca el parto y sobrevivir a éste; entorno que no se brinda en los establecimientos penitenciarios y carcelarios, como es evidenciado por los jueces de la Republica mediante las visitas realizadas en sede constitucional y previo a los fallos de tutela que declaran la reincidencia en las fallas del servicio de salud prestado en establecimientos carcelarios y penitenciarios.⁴³

En Colombia, la Corte Constitucional ha sido la encargada de proteger los derechos humanos y en especial la salud de la mujer reclusa embarazada, pero esta protección funciona caso a caso. Lo ideal sería que se aplicaran los mismos argumentos en los casos iguales, con una variable en la que el sujeto pasivo beneficiario de estos deberes por parte del Estado Social de Derecho fuese la mujer embarazada y reclusa.

No se puede dejar de lado, que es obligación del Estado garantizar de manera especial el principio de la eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos y en especial el derecho a la salud el cual no puede ser restringido por la condición de privación de la libertad, es decir el “Estado por privar de la libertad a una persona se convierte en el garante de esos derechos, como el de la salud, que tiene que permanecer incólume, el problema está en que el Estado no ha podido garantizarlo por las leyes y le ha correspondido a la Corte en múltiples ocasiones obligar a los actores del sistema a cumplirla mediante acciones de tutela”.⁴⁴

Como lo indica la Corte, es inadmisibles que a la fecha no se haya superado las desigualdades entre los planes, es decir, por ley, la mujer embarazada goza de especial asistencia y debe recibir un subsidio alimentario si estuviera desempleada, y este presupuesto no se está aplicando a la mujer embarazada y reclusa, así que la mera intención consagrada en la Ley 51 de 1981, no garantiza el principio de igualdad, la consagración no basta para eliminar las diferencias.

Las tendencias contemporáneas sobre políticas carcelarias y penitenciarias deben estar encaminadas a desarrollarse bajo concepto jurídico filosófico introducido por el abogado, sociólogo y filósofo, Alessandro Baratta⁴⁵, denominado como

⁴³ MEJIA PULGARIN, Sol Leonor. Barreras de acceso del derecho fundamental a la salud de la mujer embarazada reclusa en Colombia en perspectiva de derechos [en línea]. En: *Analecta política*. Medellín. 2014, vol. 4, no. 7, p. 326. [consultado el 16 de octubre de 2015] Disponible en Internet: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2785>

⁴⁴ *Ibíd.*, Disponible en Internet: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2785>

⁴⁵ Resocialización o control social: Por un concepto crítico de "reintegración social" del condenado. En: Seminario Criminología crítica y sistema penal (17-21, septiembre, 1990: Lima). Ponencia presentada. Perú, 1990. p. 1.

“Reintegración social”; este concepto de conformidad con lo planteado por el autor desplaza el “tratamiento” reeducativo y resocializador como finalidad de la pena tendiendo a recuperar el sentido humanitario y garantista, esto, debido a que las investigaciones empíricas arrojan como resultado dificultades estructurales y las escasas soluciones que la institución carcelaria presenta frente al objetivo resocializador.

En su ponencia, Baratta expone que:

El tratamiento resocializador ha fracasado, las transformaciones carcelarias que han tenido que implementarse en los centros de reclusión por situaciones como el terrorismo han incidido negativamente en las políticas aplicadas, pues ellas han debido implementarse asegurándose de una apertura de la cárcel hacia la sociedad (permisos ,trabajos externos, régimen abierto; de otra parte, indica el autor, la creación de cárceles de máxima seguridad ha significado la renuncia a objetivos de resocialización y la reafirmación de que la cárcel siempre ha ejercido y sigue ejerciendo el depósito de individuos aislados del resto de la sociedad y por esto neutralizando su capacidad de “hacerle daño” a ella . Adicionalmente, la crisis fiscal suprime en buena parte la base material de los recursos económicos que han debido sostener la política efectiva de resocialización y esto ha conllevado a que en muchos países y sobre todo en los Estados Unidos al desplazamiento del discurso oficial sobre la cárcel, de la prevención especial positiva (resocialización) hacia la prevención especial negativa (neutralización incapacitación).

[...] La realidad carcelaria se presenta lejos de los requisitos necesarios para poder cumplir las funciones de resocialización y que los estudios de los efectos de la cárcel sobre la carrera criminal (como el de los altos índices de reincidencia), han invalidado la hipótesis de la resocialización del delincuente a través de la cárcel; de ahí, que el debate se suscita entre dos polos: uno realista que indica que la cárcel no resocializa si no que neutraliza y que la pena carcelaria no es una oportunidad de reintegración a la sociedad si no un sufrimiento impuesto como castigo; y el segundo polo, es decir, el idealista que da lugar al reconocimiento del carácter *contrafactico** de una norma según el cual la cárcel no obstante, debe ser considerada el sitio de resocialización.⁴⁶

Parafraseando al autor, éste señala que en estos dos extremos en que se polariza la teoría de la pena se cometen dos errores iguales y contrarios. En la teoría del castigo y/o neutralización se incurre en lo que en la filosofía práctica se denomina “falacia naturalista”; se elevan los hechos a normas o se pretende deducir de unos

* Un contrafactico es un condicional y de acuerdo con la lógica, un condicional es falso sí y solo sí el antecedente es verdadero y el consecuente falso. La razón de dicha definición es evidente: la lógica nos está poniendo en guardia frente al peligro supremo en el arte de razonar, a saber, la transición de la verdad a la falsedad.

⁴⁶ Ibíd., p. 8.

hechos la norma. En el segundo caso, en el caso de la resocialización se incurre en la “falacia idealista” se coloca una norma contrafáctica que no puede ser realizada, una norma imposible.

Baratta también indica que “una alternativa entre estos dos polos es una falsa alternativa, por tanto, debe escaparse tanto de la falacia naturalista como de la idealista”⁴⁷ y el problema de la resocialización en el contexto de una teoría crítica es que se debe mantener como base realista el hecho de que la cárcel no produce efectos útiles para la resocialización del condenado y por el contrario, impone relaciones negativas en relación con esta finalidad y a pesar de esta situación la reintegración del condenado en la sociedad no debe ser abandonada si no que debe ser reinterpretada y reconstruida sobre una base diferente.

La reintegración social del condenado no puede perseguirse a través de la pena carcelaria, si no que debe darse a pesar de ella, es decir, buscando hacer menos negativas las condiciones que la vida en la cárcel comporta en relación con esta finalidad ; cualquier paso que pueda darse para hacer menos dolorosas y dañosas las condiciones de vida en la cárcel, aunque sea sólo para un condenado, debe ser mirado con respeto cuando esté realmente inspirado por los derechos, el destino de las personas detenidas y provenga de una voluntad de cambio radical y humanista y no de un reformismo tecnocrático cuya finalidad y funciones sean las de legitimar a través de cualquier mejoramiento la institución carcelaria en su conjunto.

Para una política de reintegración social de los autores de los delitos, el objetivo de la cárcel no es solamente una cárcel mejor si no también y sobre todo, menos cárcel. Se trata de considerar como política, una drástica reducción de la aplicación de la pena carcelaria, así como llevar al mismo tiempo al máximo el desarrollo de las posibilidades ya existentes de régimen carcelario abierto y la realización de los derechos del detenido a la instrucción, al trabajo y a la asistencia, a la vez que el desarrollo legislativo de estas posibilidades.

Para el autor uno de los elementos negativos de la cárcel lo constituye el aislamiento representado en los muros del reclusorio que hasta que por lo menos no sean derribados al menos simbólicamente, las oportunidades de resocialización del condenado serán siendo mínimas, pues no se puede segregar personas y al mismo tiempo reintegrarlas. Es por esto que el concepto a aplicar de reintegración social, requiere de la apertura de un proceso de comunicación e integración entre la cárcel y la sociedad en donde las personas recluida se reconozcan en la sociedad externa y la sociedad externa se reconozca en la cárcel, la reintegración

⁴⁷ Ibíd., p. 9.

social significa antes que la transformación de su mundo separado, la transformación de la sociedad para que reasuma aquella parte de sus problemas y conflictos que se encuentran segregados en la cárcel. El concepto de reintegración significa corregir las condiciones de exclusión de la sociedad de los grupos sociales de los que provienen que casi siempre de grupos ya marginados y desde allí una vez más a la cárcel.

Otro es el concepto jurídico de reintegración por cuanto en la resocialización es concebida como una manipulación del sujeto y en esta visión el detenido no es sujeto si no objeto de la acción de instancias externas a las cuales es sometido. La reintegración social del detenido no debe ser “por medio de” la cárcel sino “no obstante” la cárcel, “reconstruyendo totalmente como derechos del detenido, los contenidos posibles de toda actividad que pueda ser ejercida aún en las condiciones negativas de la cárcel a su favor , por tanto el concepto de tratamiento debe ser redefinido como servicio; servicios que van desde la instrucción personal y profesional hasta los servicios sanitarios y psicológicos, como una oportunidad de reintegración y no como un aspecto de la disciplina carcelaria”⁴⁸.

Baratta⁴⁹ considera que redefinir los conceptos de tratamiento y resocialización en términos de servicio, oportunidades laborales y sociales constituyen el núcleo más importante de una teoría nueva de reintegración social de los condenados conforme a una interpretación progresista de los principios y en materia constitucional e internacionales de la pena.

De conformidad con lo descrito con Baratta la redefinición del concepto de reintegración social del detenido debe contener los siguientes elementos programáticos:

1. Simetría funcional de los programas dirigidos a detenidos y ex -detenidos y los programas dirigidos al ambiente y la estructura social. En razón de que el detenido debe regresar a una familia y ambiente determinado, el programa debe incluir acciones contundentes a hacer más propicia las relaciones familiares y sociales. Dentro de éstas se incluyen a los organismos institucionales y comunitarios competentes para asegurar la formación profesional y la ocupación estable de los ex -reclusos.

2. Presunción de normalidad del detenido. Los programas de reintegración deben ser elaborados asumiendo como presupuesto que el penado en cuanto tal, no tiene características específicas diferentes a su condición de detenido común a toda la población carcelaria, es lo único a tomar en cuenta, ya que los programas y

⁴⁸ BARATTA Alessandro. Funciones Instrumentales y Simbólicas del Derecho Penal. En: Revista Peruana de Ciencias Penales. Enero-Julio, 1973, vol.1, p. 48.

⁴⁹ Ibíd., p. 53.

servicios que le ofrecen dependen de sus necesidades y demandas y tienen la finalidad de minimizar los efectos negativos de la prisión.

3. Exclusividad del criterio objetivo de la conducta en la determinación. Del nivel disciplinario y por la concesión del beneficio de la disminución de la pena y de la semilibertad. Irrelevancia de la supuesta “*verificación*” del grado de resocialización o de “*peligrosidad*”. La separación entre pena, disciplina y programas de reintegración social de esta propuesta, exige criterios objetivos tanto en la aplicación de la disciplina como en la concesión de beneficios y, por supuesto, deben ser de la competencia del juez de ejecución. Los criterios deben referirse sólo a la verificación y valoración de la conducta y evitarse valoraciones subjetivas que tengan que ver con las actitudes del penado y a su peligrosidad.

4. Criterios de reagrupación y diferenciación del tratamiento, independientemente de las clasificaciones tradicionales y de diagnosis “*criminológicas*” de extracción positivista. Tales criterios deben estar dirigidos a facilitar la interacción del detenido con su familia y el ambiente, mejorar las relaciones personales de los detenidos entre sí, a fin de lograr un clima social en la cárcel que permita solucionar conflictos pacíficamente y evitar soluciones violentas. Igualmente, la diferenciación de los programas deben fundamentarse en las necesidades y demandas de los procesados.

5. Extensión simultánea de los programas a toda la población carcelaria. Independencia de la distinción entre condenados y detenidos en espera de juicio. En razón del principio de no interferencia entre pena-disciplina y reintegración social, así como también de la redefinición del concepto de tratamiento concebido como servicio y ejercicio de derechos, no se justifica la exclusión de los detenidos preventivamente de dichos beneficios.

6. Extensión diacrónica de los programas. Continuidad de las fases carcelaria y postcarcelaria. La independencia de los programas y servicios de la pena disciplina permite la continuidad estructural de los programas en dos etapas facilitando la interacción entre la cárcel y la sociedad y, en consecuencia, del paso del detenido a la vida social y a la asistencia postpenitenciaria.

7. Relaciones simétricas de los roles. Aluden estas relaciones a la interacción entre detenidos y operadores penitenciarios, éstos establecen con los internos una especie de orden que le permite el control de la institución a través del poder interno, el cual interfiere en los programas de asistencia y reintegración social al colocarlo en un entorno autoritario e institucional inadecuado para la aplicación de métodos asistenciales más avanzadas. De allí que sea muy importante crear las condiciones que permitan una interacción penado operadores no como portadores de roles asimétricos sino una verdadera relación entre sujetos.

8. Reciprocidad y rotación de los roles. Considera Baratta que la asimetría de los roles es la premisa para crear condiciones adecuadas para la reciprocidad y rotación de roles. En el primer caso, la interacción penado-operador pasa de ser relaciones institucionales a oportunidad de auténtica comunicación y de aprendizaje recíproco. En tanto que en el caso de la rotación de roles significa valorizar no sólo las competencias profesionales y de las estructuras jerárquicas de la organización, sino también, la competencia y los aportes de todos los actores: penado, operador, administrador y demás involucrados en la solución de los conflictos y en la construcción de programas y servicios dentro y fuera de la cárcel. Este aspecto contribuye a promover la participación democrática en la vida carcelaria y a la interacción entre cárcel y sociedad.

9. De la anamnesis criminal a la anamnesis social. La cárcel como oportunidad general de saber y de toma de conciencia de la condición humana y de las contradicciones de la sociedad. Los conflictos carcelarios reflejan la situación social. La sustitución que Baratta propone de la anamnesis criminal por anamnesis social por parte del detenido tiene la finalidad de sustituir el reencuentro consigo mismo como individuo aislado, como lo propone la enmienda, por el reencuentro de la conexión de la historia de su vida y el contexto de los conflictos sociales y, en este sentido, la función resocializadora consiste en facilitar el desarrollo de la conciencia política y, a través de ella, viabilizar un cambio de actitud distinta a la reacción individualista y de búsqueda a soluciones a conflictos estructurales, la nueva actitud estaría relacionada con la solidaridad con su propia clase y la participación en sus luchas desde la cárcel y fuera de ésta. La anamnesis social de la infracción se convierte, para el detenido, en una oportunidad para desarrollar un conocimiento y aptitudes que promueven la reintegración social. Se busca, entonces, transformar la permanencia en la cárcel en un proceso de aprendizaje y toma de conciencia política sobre el contexto social con el objeto de lograr manejar y resolver sus propios conflictos superando, de este modo, la violencia estructural. Sólo así, se puede resolver con éxito la violencia individual y el delito y, en consecuencia, la violencia carcelaria.

10. Valor absoluto y relativo de los roles profesionales. Valoración de los roles técnicos y “destecnificación” de la cuestión carcelaria. No se trata de eliminar o desvalorizar los roles técnicos o profesionales, por el contrario, se valoriza la profesionalización de los técnicos y especialmente de los educadores y asistentes sociales, pero, se observa en los operadores, dado la elevación contemporánea del nivel de profesionalidad y de conciencia política, una visión estérilmente tecnicista de la integración social que es necesario superar. Es deseable que el Estado facilite la formación profesional, el acceso a la educación universitaria de modo que se formen docentes en los grupos de operadores, con la finalidad de que sus experiencias se pueden elaborar científicamente y reproducirlas en función de una mejor formación de los profesionales futuros, así como la extensión de la competencias y de los actores requeridos para la reintegración social y en la búsqueda de este propósito todos deben participar: las instituciones, organismos estatales o comunitarios, los ciudadanos, todos. Es por esto que el valor absoluto de los roles técnicos si bien es reconocido, se vuelve n relativos porque los roles técnicos tradicionales son sólo una parte de la totalidad de los roles y de las

competencias comprendidas en la estrategia de integración social. La destecnificación no es de los operadores profesionales sino de la cuestión carcelaria en sí misma⁵⁰

En definitiva, el problema carcelario y el de la reintegración social son problemas cruciales de la sociedad que conciernen a todos y no pueden ser materia exclusiva de los técnicos. “Al modelo tecnocrático no se le pueden dejar la solución de problemas cruciales de la sociedad porque sólo está en posibilidad de desplazar sus términos y de producir soluciones imaginarias al no controlar los problemas, sino al “*público*” de la política, por lo tanto es útil para reproducir el sistema de relaciones de poder”⁵¹. En el modelo tecnocrático el lugar de la solución del problema de la cárcel, es la cárcel misma, las vías de solución también son las mismas, es decir, la disciplina y el tratamiento, pero, estas vías están diseñadas a favor del mantenimiento del orden interno. Con esto Baratta quiere reafirmar que la cuestión carcelaria no se puede resolver en prisión y el lugar para su resolución está en toda la sociedad.

⁵⁰ BARATTA, Alessandro. Reintegración social del detenido. Redefinición del concepto y elementos de operacionalización. 1999. Citado por MARTÍNEZ, Mauricio. comp. La pena: Garantismo y democracia. Santa Fe de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, capítulo III, p. 67-88.

⁵¹ BARATTA, Alessandro. Infancia y democracia. En: Derecho a tener derecho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina. 1999, tomo 4, p. 226.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Queda evidenciado que históricamente la situación carcelaria en Colombia ha tenido exactamente la misma problemática de hacinamiento y falta de presupuesto, lo que arroja como resultado la violación sistemática de los derechos humanos y desde luego la invisibilización de la mujer como grupo minoritario de esta población.

La perspectiva de género debe incorporarse a las normas y políticas penitenciarias, para llegar a la materialización del principio de igualdad, recogido en la Constitución, en el sentido de ampliar las situaciones relacionadas con los la familia, el trabajo, la salud y la reincorporación a la sociedad. “La inclusión de la perspectiva de género en la ejecución de las penas privativas de libertad, puede ser un instrumento útil y eficaz para conseguir la rehabilitación y reinserción social de las mujeres delincuentes, evitar la reincidencia, así como también nos servirá para actuar en la prevención de la delincuencia”.⁵²

Los estudios y análisis sobre las particularidades sobre la población femenina en los centros penitenciarios, así como de los delitos que cometen, permiten un acercamiento a la mujer recluida no como una derivación de la delincuencia masculina si no con unas características propias que merecen un tratamiento específico teniendo en cuenta una perspectiva de género que guíe un régimen penitenciario de mujeres pensado para mujeres.

La superproducción de normas en Colombia ha sido una estrategia insuficiente para superar los problemas derivados del sistema penitenciario, el bienestar en los sitios de reclusión no depende entonces de una normatividad amplia si no de la real y efectiva aplicación de la ya existente.

La estadía de la mujer en la cárcel constituye una verdadera lucha por la supervivencia lo que trae como resultado, el despojo de los derechos humanos tales como la dignidad, pérdida de la individualidad, aislamiento y pérdida de la familia y la igualdad en donde el Estado es el principal agente activo en la vulneración de estos derechos.

⁵² SERRANO TARRAGA, Maria Dolores. La consideración de género en la ejecución de las penas privativas de libertad [en línea] En: Estudios penales y criminológicos. 2010, no. 30, p. 481-544 [consultado 16 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: <http://hdl.handle.net/10347/4165>

Los problemas que acarreen la pérdida de la libertad de la mujer no se encuentran en el sistema penitenciario, ni en las cárceles si no fuera de ella, el Estado en su precaria tarea de mejorar e implementar mejores políticas deja de lado la verdadera reintegración social de la persona reclusa.

BIBLIOGRAFÍA

BARATTA Alessandro. Funciones Instrumentales y Simbólicas del Derecho Penal. En: Revista Peruana de Ciencias Penales. Enero-Julio, 1973, vol.1, p. 35-64.

-----. Infancia y democracia. En: Derecho a tener derecho. Infancia, derecho y políticas sociales en América Latina. 1999, tomo 4, p. 207-236.

-----. Reintegración social del detenido. Redefinición del concepto y elementos de operacionalización [en línea]. En: Amicus Curiae, 2011, vol. 8, no. 8 [consultado el 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/article/viewFile/585/572%3E>

-----. Resocialización o control social: Por un concepto crítico de "reintegración social" del condenado. En: Seminario Criminología crítica y sistema penal (17-21, septiembre, 1990: Lima). Ponencia presentada. Perú, 1990. 10 p.

BARBIERI GARCÍA, María. Teresita de. Acciones afirmativas: Antecedentes, definición y significados. Aportes para la participación de las mujeres en los espacios de poder. En: Memorias del Foro Mujeres y Política, Instituto Nacional de las Mujeres. 2002, 126 p.

BARRÈRE UNZUETA, María de los Discriminación, derecho antidiscriminatorio y acción positiva en favor de las mujeres Madrid: Civitas, 1997, 124 p.

BENAHABIB, Seyla, Una revisión del debate sobre las mujeres y la teoría moral. En: Isegoría: Revista de filosofía moral y política. 1992, vol. 6, p. 37-63.

BENHABID, Seyla y CORNET, Drucilla. Teoría feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons el Magnánim, 1990. 124 p.

BARRANCO AVILÉS, Maria del Carmen. El Discurso de los derechos: del problema terminológico al debate conceptual. Madrid: Editorial Dykinson, 1996. 88 p.

BOBBIO, Norberto, RUÍZ Miguel Alfonso. Contribución a la Teoría del Derecho. España: Editorial Debate, 1990. 408 p.

CARBONELL, Miguel. Comp. El principio constitucional de igualdad. Lecturas de introducción. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2003. 320 p.

COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1009 de 2006. (enero 23). Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género. En: Diario oficial, Bogotá. 23, enero, 2006. No. 46.160.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-293/10 (21 Abril 2010). Por el cual se definen las Acciones afirmativas-concepto, Acciones afirmativas-evolución histórica, Acciones afirmativas-Tipos [en línea]. Bogotá D.C.: [Consultado 07 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2010/C-293-10.htm>

Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer "Convención de Belem Do Para" [en línea] Belem do Para. Organización de los Estados Americanos, OEA, 1994 [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

DA SILVA, José Alfonso. Aplicabilidad de las normas constitucionales [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003 [consultado 16 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1000/5.pdf>

GARCÍA AÑÓN, José. El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa. Algunos problemas de la dogmática jurídica y el Derecho Europeo [en línea] En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho.1999, no. 2 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.uv.es/cefd/2/garcia.html>

GIMÉNEZ GLUCK, David. Una manifestación polémica de igualdad: acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa. Valencia: Tirant lo Blanc, 1990. 56 p.

INPEC. MINISTERIO DE JUSTICIA. Reseña histórica [en línea]. Bogotá D.C.: [consultado 07 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/Institucion/ResenaHistorica>

INSTITUTO ROSARISTA DE ACCIÓN SOCIAL –SERES–, Universidad del Rosario. Desarrollo penitenciario y carcelario colombiano entre 1995 y 2010, en el marco de las políticas del Estado a partir de las sentencias de la Corte Constitucional [en línea] Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2011. 322 p. [consultado 07 de agosto de 2015] Disponible en Internet: http://www.urosario.edu.co/Accion-Social/documentos/Desarrollo_del_sistema_penitenciario.pdf

LAMAS, Marta. La perspectiva de género [en línea]. En: Revista de Educación y Cultura: de la Sección 47 del SNTE. Diciembre, 1995, no. 8, p. 14-20 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm>

LÓPEZ REYES, Sandra; GÓMEZ HINOJOSA, Carolina y MUNDO VELÁSQUEZ, Rodolfo. Enfoque de género en microempresas rurales un modelo de gestión. En: Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa. Julio-diciembre, 2015, no. 3, 24 p.

MÁRQUEZ ESTRADA, José Wilson. Estado Punitivo y control criminal. Cárceles, prisiones y penitenciarias en Colombia en el siglo XIX. En: Revista criminalidad. Enero-abril, 2013, vol. 55, no. 1, p. 109.

------. La Imposible Prisión. Sistema penitenciario y carcelario en el Estado soberano de Bolívar: 1860-1880. En: Palobra, Palabra que obra. Septiembre-agosto, 2010, vol. 11, no. 11, p. 198-217

MARTÍNEZ, Mauricio. comp.. La pena: Garantismo y democracia. Santa Fé de Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 143 p.

MARTÍNEZ MUÑOZ, Juan Antonio. Igualdad Jurídica y Género [en línea] En: Anuario de Derecho Humanos. Nueva Época, 2010, vol. 10, p.389-434 [consultado el 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet en: <http://eprints.ucm.es/11357/1/Igualdad.pdf>

MEJIA PULGARIN, Sol Leonor. Barreras de acceso del derecho fundamental a la salud de la mujer embarazada recluida en Colombia en perspectiva de derechos [en línea]. En: Analecta política. Medellín. 2014, vol. 4, no. 7, 326 p [consultado el 16 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: <https://revistas.upb.edu.co/index.php/analecta/article/view/2785>

MILLET, Kate. Política sexual: Cátedra. Madrid: Instituto de la Mujer, 1995. 640 p.

NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Los Derechos Humanos y las prisiones: Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. Nueva York y Ginebra. 2004. 259 p.

OLLERTO TASSARA, Andrés. Derechos humanos y metodología jurídica. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1989, 333 p.

Carta de las Naciones Unidas [en línea]: Preámbulo. (Artículos 1 y 55 c) [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.un.org/es/documents/charter/>

PERÉZ PORTILLA, Karla. Principio de igualdad: alcances y perspectivas. México: UNAM-Conapred, 2005. 283 p.

PROCURADURÍA DELEGADA EN LO PREVENTIVO PARA DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS ÉTNICOS, GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS. Mujeres y prisión en Colombia análisis desde una perspectiva de derechos humanos y género [en línea]. Bogotá D.C.: Unifem, 2006. p. 12 [consultado 10 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/descargas/publicaciones/mujeresyprisionencolombia.pdf>

REY MARTÍNEZ, Fernando El principio de igualdad y el derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo [en línea] Madrid: McGraw-Hill, 1995, 138 p. [consultado 13 de julio de 2015]. Disponible en Internet https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CCsQFjADahUKEwjDwczfpe3IAhUFQCYKHenjDtg&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fappsext%2FDescargarFichero%2Fdefault.aspx%3FcodigoAcceso%3DPdfRevistaJuridica%26fichero%3DRJ_20_V_5.pdf&usg=AFQjCNE12TIsDqD2lptpC1x2txEGU45ONQ&cad=rja

SERRANO TARRAGA, Maria Dolores. La consideración de género en la ejecución de las penas privativas de libertad [en línea] En: Estudios penales y criminológicos. 2010, no. 30, p. 481-544 [consultado 16 de octubre de 2015]. Disponible en Internet: <http://hdl.handle.net/10347/4165BENHABID>, Seyla y CORNET, Drucilla. Teoría feminista y teoría crítica. Valencia: Alfons el Magnànim, 1990. p. 9-28

SOLANO D., Sergio Paolo. Informe del gobernador de la provincia de Barranquilla, dando varios datos para el mensaje a la Asamblea Legislativa. 1868. [en línea] En: Memorias: Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. Octubre, 2013, no. 21 [consultado 17 de agosto de 2015]. Disponible en Internet: <http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/memorias/article/view/5713/5072>.

RUIZ CARBONELL, Ricardo. El principio de igualdad entre hombre y mujeres. Del ámbito público al ámbito jurídico-familiar. Trabajo de grado Doctor en Derecho. Santiago de Cali: Universidad de Murcia. Departamento de Derecho Privado, 2009. 385 p.

YAGÜE OLMOS, Concepción. Mujeres en prisión: Intervención basada en sus características, necesidades y demandas. En: Revista Española de Investigación Criminológica. España. 2007, vol. 24, no. 5, p. 17-18.